

El riesgo de ser joven en Ciudad Bolívar

En la localidad con el mayor índice de pobreza de Bogotá, 64 jóvenes entre los 19 y 27 años de edad fueron asesinados entre enero y marzo de este año, al parecer por parte de los grupos de autodefensas y las Farc. Más que la lucha por el control de un territorio (estratégico por su acceso a la capital), lo que está en juego es el dominio de una población a través del miedo.

Una calle estrecha y polvorienta, que se vuelve un lodazal con las primeras gotas del invierno, va marcando el ingreso a esa especie de laberinto en que se convierte el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar, cuando un aviso en la montaña sentencia: "Prohibido el paso".

Atrás ha quedado un conjunto de casas y de ranchos en madera y techos de zinc, que parecerían abandonados si no fuera porque unos ojos inquisidores escudriñan a través de un hueco que hace las veces de ventana y una voz serena y pausada rompe la angustia de sentirse vigilados por todas partes: "Aquí es, espere un momento yo amarro el perro".

A los pocos segundos, envuelta en una toalla, sale doña María Loaíza. Su perro apenas puede caminar. "No sé qué le pasa, pero lleva varios días así. No come. Bueno, es que yo tampoco como mucho".

María tiene 56 años, aunque aparenta varios más. Tiene cinco hijos, pero una incursión de las FARC en Roncesvalles (Tolima), en 1999, le quitó a los dos mayores. Otro está lisiado porque perdió uno de sus ojos con la explosión de una bomba que cayó a un par de casas de la suya.

Ella hace tres años se ganó, a la fuerza, un título que la hace llorar: desplazada. "Que es lo mismo que estar muerta en vida, porque es como si uno no existiera", dice entre sollozos, mientras saca un pedazo de tela que convierte en pañuelo.

Es el mismo trapo viejo que tuvo que sacar a comienzos de este año, cuando un grupo de hombres armados llegó al barrio, lista en mano, y sacó a tres jóvenes de sus humildes ranchos, asesinó a uno de ellos, "por jíbaro y ladrón", según vociferaban entre las sombras de la noche los supuestos miembros de las autodefensas.

"Mataron a José y a los otros dos les dijeron que se tenían que ir del barrio, porque no les iban a permitir seguir vendiendo vicio. Nadie quería salir de sus casas por miedo, pero cuando me asomé por este mismo hueco, supe que habían matado a alguien. Eso fue muy rápido y los gritos de la vecina, doña Gloria, la mamá de José, me obligaron a salir. Le pegaron tres tiros y estaba destrozado. Lo único que tenía para secarle las lágrimas a mi comadre era este pañuelo y, mire, hasta manchado de sangre quedó".

José tenía 19 años y según los vecinos del barrio no era un vicioso ni un ladrón. "Trabajaba en Abastos descargando camiones y lo único que hacía era tomarse unas cervezas con sus amigos los fines de semana. Eso no es que

sea pecado", dice doña María. "Lo que pasa es que ya es mejor no salir de la casa".

María tiene razones para temer. En el sector de Ciudad Bolívar de Bogotá, 64 personas fueron asesinadas entre enero y marzo de este año, 48 de ellas con armas de fuego. Las víctimas eran hombres entre los 19 y 27 años de edad, como José.

Los asesinatos, ocurridos en barrios como Caracolí, El Paraíso, Potosí, Sierra Morena, Tres esquinas y Vistahermosa, correspondían, según las autoridades, a la mal llamada "limpieza social".

Los homicidios se dieron por grupos de tres o cuatro, en una misma semana o unos cuantos días, y las víctimas eran supuestos expendedores de droga (conocidos como jíbaros) o líderes de pandillas a quienes los asesinos, en algunos casos, encapuchados y vestidos por completo de negro, llegaban a buscar con lista en mano.

Incluso, se habla de un pistolero, que acompañado por cuatro hombres que le cuidaban la retaguardia, fue asesinado con una pistola 9 milímetros, uno por uno de los miembros de un listado que fue conocido públicamente. Al agotarse la lista, después de tres meses de actividad, el hombre desapareció y no volvió a saberse nada de él.

"En el barrio se decía que los muertos eran muchachos malos", asegura un funcionario que tuvo conocimiento de los casos. Sin embargo, algunos podían ser simplemente muchachos considerados vagos o desocupados. En su opinión, la estrategia era asesinar a los jefes de las bandas para asustar a los demás miembros del grupo y dispersarlos.

Por ejemplo, tres de los muertos eran supuestamente líderes de una banda que asaltaba en los buses; de otros dos se decía que habían bajado de Internet los escudos de las autodefensas y se dedicaban a delinquir fingiendo ser miembros de la organización. En ambos casos, sus compañeros se escondieron o huyeron de la localidad después de los asesinatos.

El 3 de marzo del presente año, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo elaboró un informe de riesgo en el que advertía sobre la situación que se venía presentando en Ciudad Bolívar.

De acuerdo con el informe, desde octubre de 2003 comenzó a detectarse la presencia de miembros del Frente Capital del Bloque Centauros de las AUC, en esta zona en donde desde la década de los ochenta han hecho presencia las milicias de las Farc.

Los asesinatos selectivos eran consecuencia de este avance. El objetivo de las Autodefensas era eliminar a las pandillas que estuvieran vinculadas con las Farc para impedir que cualquier otro grupo ilegal o de delincuentes pusiera en

duda su control. La respuesta de las Farc, en las zonas que continuaban bajo su control, fue similar.

Con base en el informe de riesgo, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) declaró una “alerta temprana” respecto de 10 de los 252 barrios de la localidad de Ciudad Bolívar, ubicados en las partes altas de la localidad y adyacentes al sector de Altos de Cazucá, del municipio de Soacha, del cual los separa solamente una calle.

Los dos sectores forman un corredor estratégico para los grupos armados ilegales porque comunican con la zona rural de Bogotá, con la región del Sumapaz y con los departamentos del Tolima, Cundinamarca y Huila, a través del cual los grupos ilegales pueden transportar armas y provisiones desde Bogotá y acceder a la capital. Se dice que antes de que se fortalecieran los controles en la zona, las Farc tenían allí sitios de descanso en donde curaban a sus heridos o se replegaban cuando era necesario.

En junio de 2002, el SAT expidió la alerta temprana 062 sobre los sectores de Altos de Cazucá y la Ciudadela Sucre, en los que en circunstancias similares a las que ahora se presentan en Ciudad Bolívar, circuló una lista de personas acusadas de pertenecer a las Farc. Algunas de ellas fueron asesinadas y muchas más tuvieron que desplazarse. Sobre esta alerta se han expedido desde entonces seis notas de seguimiento, que se expiden cada vez que se presentan hechos nuevos sobre una situación que ha sido objeto de una alerta.

Ciudad Bolívar, la localidad número 19 de Bogotá, tiene una extensión de 22.914 hectáreas, de las cuales solo 2.088 (el 9 por ciento) pertenecen al área urbana. El resto está compuesto por bosques y tierras de páramo y subpáramo, que comunican con la región del Sumapaz.

La historia de los barrios de Ciudad Bolívar está ligada a los grandes procesos de transformación urbana que ha vivido el país. Hacia finales de la década de los cuarenta, se conformaron los barrios Meissen, San Francisco, Buenos Aires, Lucero Bajo y La María, situados en las partes bajas y medias de la localidad. Sus pobladores eran campesinos provenientes de los departamentos de Tolima, Boyacá y Cundinamarca, que habían sido expulsados de su tierra a causa de la violencia.

En los años ochenta, a raíz del posicionamiento de los grupos guerrilleros en las áreas rurales, surgieron nuevos barrios en la parte alta de la localidad como Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan Rosé Rendón, Juan Pablo II, Sierra Morena y Arborizadora Alta y Baja, algunos de los cuales hacían parte de un programa denominado “Lotes con Servicios”, que contó con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo.

Hoy viven en la localidad, según las proyecciones del censo de 1993, unas 602.109 personas que en su gran mayoría (cerca del 95 por ciento) pertenecen a los estratos uno y dos. Lucero es el sector en que reside mayor población correspondiente a este estrato, con cerca de un 31,85 por ciento del total de habitantes de la localidad. Arborizadora Alta e Ismael Perdomo son los únicos

barrios con población de estrato tres, aunque con un porcentaje poco significativo (2,3 y 0,4 por ciento).

De acuerdo con un informe del Departamento Administrativo de Bienestar Social, Ciudad Bolívar es la localidad que presenta los índices más altos de pobreza de Bogotá. Un 26 por ciento de la población, es decir, 156.000 personas, presentan necesidades básicas insatisfechas y el número de afiliados al Sisben en el estrato 1 que viven en la localidad equivale al 33,45 por ciento de todos los afiliados al estrato 1 de la capital.

Sin embargo, en la localidad se destaca la presencia de instituciones y programas para el desarrollo social. En Ciudad Bolívar hay por lo menos 40 organizaciones sociales que manejan más de 1.000 proyectos financiados con recursos de la Unión Europea, la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas, el Gobierno de Estados Unidos y ACNUR, entre otros, con fines de educación, alimentación, salud o atención de la vejez.

La Corporación Luchadores por la paz (Colpaz), es una de estas organizaciones sociales que operan en la localidad. Su trabajo está orientado principalmente hacia los jóvenes. Con más de diez años en Ciudad Bolívar, la fundación ha diseñado un esquema que, según uno de sus directivos le permite agrupar a cerca de 12.000 jóvenes. En las 26 instituciones educativas de la zona (que en su mayoría tienen doble jornada escolar), Colpaz cuenta con 350 jóvenes que lideran a grupos de 35 ó 40 integrantes cada uno.

La red de jóvenes, vinculada a la Red de Promotores de la Defensoría del Pueblo, elaboró el año pasado una declaración de derechos humanos en la que al lado de los tradicionales derechos a la vida, la salud y la educación, enfatiza en uno que no ha sido tenido en cuenta en otras declaraciones, pero que, para la realidad de Ciudad Bolívar, resulta significativo: el derecho a ser escuchado.

En el presente año, partiendo de tal declaración de principios, asumieron la tarea de hacerse escuchar en el diseño del Plan de Desarrollo de Bogotá, que el Alcalde Luis Eduardo Garzón estaba obligado a adoptar en los primeros meses de su mandato.

Los jóvenes realizaron más de 40.000 encuestas, con base en las cuales encontraron que la mayor necesidad de la localidad era la construcción de nuevas escuelas y se propusieron definir de dónde podría salir el dinero para cumplir ese objetivo.

Finalmente, la organización realizó un evento con representantes de las principales entidades del Distrito en el que presentaron su propuesta de plan educativo para la capital: construir 38 colegios en Bogotá en los próximos cuatro años, de los cuales por lo menos 9 deberían estar ubicados en Ciudad Bolívar.

Concluida la reunión, los jóvenes hicieron firmar un acta a las autoridades distritales para comprometerlas. La propuesta fue tenida en cuenta al definir las alternativas que ha planteado la actual Administración para superar la emergencia social que ha declarado en la localidad.

“Los jóvenes van adquiriendo cada vez más voz. Es por eso que decidimos trabajar con ellos y no con los adultos. Es la forma de consolidar una comunidad organizada en el futuro, que hasta ahora no ha existido”, comenta un directivo de Colpaz.

“En Bogotá está lejos de producirse un enfrentamiento armado en disputa por territorios, como sí ha ocurrido en otras ciudades como Medellín”, afirma Hugo Acero, ex subsecretario de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Bogotá.

Acero, que fue el responsable de la Seguridad en Bogotá tanto en la administración de Enrique Peñalosa como en las dos de Antanas Mockus, cree que los grupos armados ilegales han insertado miembros de sus organizaciones en la capital por razones estrictamente económicas.

“Lo que hay en Bogotá es una lucha por el control de centros de negocios donde se mueve mucho dinero”, asegura.

Y esos centros de poder económico tienen nombre propio: Corabastos, el 7 de Agosto, los Sanandresitos, el Restrepo y últimamente la zona de tolerancia del centro de la ciudad, en donde la prostitución se conjuga con los expendios de droga y mercancías ilícitas.

No en vano, según las denuncias de la propia Administración Distrital, en los Sanandresitos y en Corabastos, tanto las Farc como las Autodefensas han montando “oficinas de cobro” de extorsiones a comerciantes y empresarios. Las autoridades han relacionado algunos de los atentados terroristas cometidos en la capital en el último año con este delito.

Leovigildo Riaño, Personero Local de Ciudad Bolívar, coincide con Acero en que lo que ocurre en este sector de Bogotá no es producto de una disputa territorial, pero reconoce que las Autodefensas y las Farc ejercen de hecho un control sobre ciertas zonas, a través del miedo.

Así lo piensa también María: “Aquí la gente dice que están matando a muchos jóvenes, pero nadie sabe quiénes son los responsables y eso aumenta el miedo de salir a la calle”.

"Usted puede venir aquí, pero con la ayuda de un conocido y a ciertas horas del día, porque [si no] no entra. La gente llega a sus casas antes de las seis de la tarde, porque más tarde corre peligro. Los que no, es porque trabajan de noche o hacen parte de esos grupos de delincuentes", asegura María.

El retorno de la gente que trabaja - la mayoría en la informalidad, porque el desempleo en sectores populares de Bogotá pasa del 24% - comienza

puntualmente todos los días a las 5:00 de la tarde. A esa hora, decenas de mujeres y jóvenes se bajan de los buses y colectivos, en algunos de los cuales, hasta hace pocos días, se leían graffitis de advertencia: "Muerte a las Farc y Eln: Auc".

"Esos carros los pintan, pero los vuelven a rayar", dice María y recuerda que el año pasado las autodefensas les pagaron a unos jóvenes del barrio para que llenaran las paredes con sus consignas.

La Personería Local también recibió denuncias de que las Autodefensas habían hecho circular panfletos con mensajes como éste: "Si no acuestan a sus hijos a las 8, nosotros se los acostamos a las 9".

Una líder del sector de La Unión tuvo que abandonar la localidad, luego de que en la puerta de su casa fue pegado un aviso en el que les daban a sus hijos 24 horas para abandonar el barrio. Sus hijos se fueron en el plazo señalado, pero al día siguiente fue a nombre de ella que apareció fijado el ultimátum.

Las amenazas no sólo se han dado en el sur o en las periferias. También en el centro de la ciudad, como en el sector de Los Mártires, en donde en algunos de sus barrios se lee con frecuencia: "Objetivo militar, los viciosos: Auc" o "Auc presentes, guerrilleros se mueren".

En un informe sobre desplazamiento forzado en Bogotá, publicado por la Defensoría del Pueblo a finales de julio, se reconoce que es difícil calcular la magnitud del desplazamiento intraurbano en la capital.

"La escasa información sobre el paradero de muchas de las personas que se encuentran en Bogotá afectadas por el desplazamiento – dado el silencio y el anonimato que conservan para no convertirse en blanco de atentados por parte de los actores armados – demuestra la dificultad para detectar este fenómeno".

Sin embargo, el documento asegura que a raíz de la situación presentada en la localidad de Ciudad Bolívar ya es posible hablar de que esta dinámica (que ya se había presentado en otras ciudades del país) se está generando en la capital.

"44 líderes de población desplazada han denunciado amenazas contra sus vidas ante el Ministerio del Interior y demás instituciones del Gobierno nacional; situación que ha ocasionado la movilidad permanente de estas personas y de sus familias, desde y hacia diferentes sectores y localidades de la ciudad", agrega la investigación.

A ello se suma el problema del reclutamiento forzado de jóvenes. En mayo pasado, la Policía detuvo en el sector de Juan José Rondón a un miembro de las Autodefensas que estaba cumpliendo esta labor. Según la Policía, el hombre fue visto en varios colegios de la zona buscando jóvenes para su organización, con la única condición de que fueran muchachos "sanos".

Según las denuncias recibidas por la Personería Local, las Autodefensas ofrecen entre 350.000 y 600.000 pesos mensuales a los jóvenes de escasos recursos que quieran vincularse a sus filas. De las Farc, que tradicionalmente habían acudido a lo que ellos llaman trabajo político en los sectores pobres con el propósito de ganar adeptos, también se ha denunciado que están ofreciendo sumas similares a quienes se vayan con ellos.

Una de las alternativas que utilizan los grupos armados ilegales, de acuerdo con el Informe de Riesgo de la Defensoría, consiste en cooptar las bandas que ya operan en la zona. En estos casos, las Farc o las Autodefensas se encargan de dotarlas de armas y municiones y, en algunos casos, de pagarles, a cambio de realizar algunos trabajos para ellas.

Con base en el informe de riesgo elaborado por la Defensoría del Pueblo fue expedida una Alerta Temprana que dio lugar a un Consejo de Seguridad realizado el 18 de mayo pasado, presidido por el Alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, y en el que participaron representantes del Gobierno Nacional.

En el Consejo se acordó que era necesaria una mayor coordinación entre el Gobierno y la Alcaldía para enfrentar el tema de Bogotá, y se creó un comité para definir un conjunto de acciones específicas entre el Ejército y la Policía, para fortalecer la seguridad de la ciudad.

En los últimos meses, la Brigada XIII del Ejército ha montado dos nuevas bases en el sur de Bogotá: una en Ciudad Bolívar, en el sector de Sierra Morena y Los Alpes; otra, en Altos de Cazucá, en el sector de la Ciudadela Sucre.

La Policía, por su parte, a raíz de la expedición de la Alerta Temprana, creó un Cuerpo Élite de Acción contra el delito, conformado por 120 hombres y destinado a operar especialmente en los barrios Caracolí, Potosí, Tres Esquinas y Sierra Morena.

Según sus propias cifras, en los primeros días de trabajo en Ciudad Bolívar se realizaron 40 allanamientos, se recuperaron 27 vehículos y 11 motos robadas y se decomisaron mercancías hurtadas por 47 millones de pesos. Así mismo, se incautaron 112 armas de fuego, se detuvieron 392 personas y se limpiaron todos los graffitis de la zona.

Sin embargo, la Defensoría y la Personería Local han recibido denuncias de malos tratos por parte de la Fuerza Pública, en especial en las requisas realizadas contra los estudiantes de los colegios.

“La alerta temprana se adoptó para proteger a los jóvenes del conflicto, no para perseguirlos”, afirmó uno de los líderes comunitarios que presentó las denuncias. Estas quejas son aún objeto de investigación.

La Administración de Garzón, por su parte, ha dirigido sus esfuerzos a enfrentar la problemática social. Por esta razón, a partir del primero de junio,

lanzó una ofensiva social en la localidad, que contempla mayores inversiones en la zona y más presencia institucional.

“Se ha diseñado un plan para atacar de raíz el problema, que se podrá erradicar no sólo aumentando el pie de fuerza militar sino con obras sociales como las que contempla el Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años”, afirma Carlos José Herrera, subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Bogotá.

Según un anuncio oficial, a la localidad serán destinados 1.6 billones de pesos en inversión social, los cuales serán destinados en los próximos cuatro años a la creación de 30.000 nuevos cupos escolares (frente a un déficit actual de 50.000), la ampliación del hospital de Vistahermosa y el montaje de 8 comedores comunitarios y 9 restaurantes escolares, dentro del programa de Bogotá Sin Hambre.

Este proyecto se suma al de la anterior administración que, a través del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, ejecutó un plan integral para llevar acueducto, alcantarillado, vías y transporte a estos sectores. Hoy, los alimentadores de Transmilenio ya cubren buena parte de las zonas altas de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con el Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia, que agrupa las cifras de Medicina Legal, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en los meses posteriores a la expedición de la Alerta Temprana, el número de homicidios cometidos en Ciudad Bolívar se redujó de 25, en febrero, a 19, en marzo, 17, en abril, y 13 en mayo.

Sin embargo, la situación social continúa siendo dramática. Tal como lo señala el mencionado informe de la Defensoría sobre desplazamiento en la capital, Ciudad Bolívar recibió en el año 2002, junto con las localidades de Usme, Kennedy y Bosa, el 58 por ciento de las familias que llegaron a la ciudad. Es decir, la mayor parte de los desplazados que llegan a Bogotá, lo hacen al lugar en donde menores posibilidades tienen de ser atendidas.

“Uno viene a Bogotá a buscar tranquilidad y un poco de futuro para los hijos, pero se encuentra con pobreza, soledad y mucho miedo, pues uno aquí no existe. Eso es bueno, que nadie sepa quién es uno, pero muy malo porque prácticamente esta uno encerrado en su propia casa”, dice María.

En efecto, de su humilde vivienda sale solo dos veces por semana: un día para lavar y planchar en una casa de familia y otro para ir a la central de abastos a rebuscar entre las sobras de alimentos, como lo hacen muchos de los habitantes de Ciudad Bolívar.

Bogotá es una ciudad que crece a tasas por encima del promedio nacional, que mueve el 35% de la producción del país, que tiene coberturas casi completas

en salud y educación y que, como ninguna otra urbe del país, ha vinculado en los últimos años a más de un millón y medio de pobres al Sisbén.

Sin embargo, es una ciudad en donde el progreso no alcanza para todos.

María asiente con la cabeza y recorre con la mirada su humilde rancho. Una cama montada sobre unos adobes, un fogón de leña que estuvo apagado todo el día, un rincón de comida en descomposición para el perro y las fotografías amarillentas de los dos hijos que murieron en Roncesvalles después del ataque de las Farc, en 1999.

¡Ah! y una cédula que ella ha tratado de esconder desde cuando llegó a Bogotá y que, en últimas, es su gran verdad:

"Yo no me llamó María, pero me tuve que cambiar el nombre por miedo a que me buscaran y terminaran de acabar con lo poco que me queda de familia. Con lo poco que me queda de vida, que son mis hijos", asegura María, Mercedes o Esperanza, qué más da un nombre en una ciudad llena de laberintos, pero también de inmensas posibilidades.